

El rol del Fondo Monetario Internacional en la transformación económica de Europa Central

Joaquim Ferran (*)

Consideraciones generales

En los últimos cinco años, tras la caída de los regímenes comunistas, los países de Europa Central (Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania) han experimentado un cambio radical en sus estructuras político-sociales y económicas, con el establecimiento de sistemas pluralistas de democracia representativa así como la puesta en marcha de un proceso de transformación en economías de mercado, que a pesar de las muchas dificultades encontradas es ya indudablemente irreversible. Dada la enormidad de los problemas y la carencia de experiencias previas sobre la mejor manera de enfocarlos, era inevitable que el camino fuera a veces lento y sinuoso, y en varios de los países ha habido un retorno al poder de partidos nacidos de los antiguos partidos comunistas, lo que podría verse como algo preocupante. Sin embargo, sigue existiendo un amplio consenso que la consolidación de la democracia y de los sistemas de economía de mercado se deben apoyar mutuamente, y es alentador que los partidos comunistas reformados que han llegado al poder no hayan cuestionado ni los objetivos últimos ni las líneas generales de las políticas de ajuste. Esto no es sorprendente, dado el absurdo funcionamiento en la práctica de los sistemas de planificación central, que—contra la promesa de un paraíso futuro—destinaron enormes recursos a una capitalización improductiva que constituyó probablemente el mayor derroche en toda la historia e impuso unas privaciones inenarrables, por injustificadas, a la población.

Las estrategias de reforma económica adoptadas por los diferentes países han variado de acuerdo con las circunstancias de cada uno de ellos; pero los problemas tenían elementos comunes, de modo que los diferentes países encontraron inspiración en los éxitos y fallos de sus vecinos empeñados en procesos de transformación similares. Las experiencias a lo largo de muchos años en otras regiones del mundo podían servir de punto de referencia, pero había un límite a su utilidad, por cuanto que las economías centralmente planificadas tenían características sin precedentes en otras regiones, sobre todo en lo que atañe a la infraestructura legal e institucional y al grado y forma de control estatal de la actividad económica.

En el pasado quinquenio el Fondo Monetario ha trabajado estrechamente con los países de Europa central, algunos de los cuales ingresaron a la institución antes del comienzo del proceso de transformación, en el contexto de intentos parciales de liberalización (Rumania en 1972, Hungría en 1982 y Polonia en 1986). Checoslovaquia y Bulgaria habían mantenido economías mucho más sujetas a control estatal hasta fines de la década de los ochenta, y no ingresaron al Fondo hasta septiembre de 1990, mientras que Albania, donde el proceso de cambio político mostró un rezago en relación con sus vecinos, no ingresó hasta octubre de 1991. El diálogo del Fondo con los gobiernos se llevó a cabo mediante las misiones de consultas anuales y negociaciones de acuerdos financieros, y un programa de asistencia técnica que por su tamaño y variedad excedió todas las experiencias previas del Fondo. En efecto, en el período 1990-94, el Fondo envió más de 250 misiones de asistencia técnica a los siete países en cuestión, de las cuales un 70 por ciento fueron en las áreas monetaria, cambiaria y fiscal.

(*) Director de la Oficina Europea del Fondo Monetario Internacional. Los puntos de vista expresados en este artículo son los suyos propios y no corresponden necesariamente a los del FMI.

Por lo demás, el Fondo ha suministrado una importante ayuda financiera. Desde comienzos de 1990, ésta ha ascendido a más de 5.500 millones de DEG (equivalente a cerca de 8.000 millones de dólares) y ha representado casi el 20 por ciento del total de los desembolsos del Fondo en este período. A efectos de comparación, cabe decir que las cuotas de estos países representan el 6.8 por ciento del total de las cuotas de todos los países en desarrollo, y que el saldo pendiente de crédito extendido por el Fondo en relación a las cuotas es hoy en día de casi el 100 por ciento o aproximadamente el doble que en el caso de todos los países en desarrollo.

Características de los programas de ajuste

Desde un comienzo, los programas económicos apoyados por el Fondo en Europa central mediante el acceso a sus recursos financieros se basaron en la convicción de que era indispensable un ataque simultáneo a los desequilibrios macroeconómicos, las distorsiones en los precios relativos y la falta de reglas claras de protección legal a los derechos de propiedad. Por supuesto, también había conciencia de la necesidad de otras reformas, tales como la creación de mecanismos efectivos de control monetario y fiscal y de un marco institucional adecuado a economías de mercado. Aparte de estos principios generales, cabe observar que el contenido de los programas ha sido diferente de país a país, en consideración a los respectivos puntos de partida y también a la diversidad de las condiciones políticas y sociales.

En 1989, Hungría y Polonia tenían detrás de sí veinte y diez años, respectivamente, de intentos de reforma que, sin abandonar la planificación central, habían limado algunas de sus asperezas introduciendo grados de libertad en lo que se refiere a los precios (en Hungría la proporción de precios controlados se había reducido a menos del 40 por ciento, mientras que en Polonia los precios de los alimentos no estaban sujetos a control administrativo), a la propiedad privada (30 por ciento de la economía polaca y 10 por ciento de la húngara estaban en manos privadas), y al uso de divisas y de préstamos externos. Estos dos países, junto con Rumania, habían reducido su dependencia del Consejo de Asistencia Económica Mutua (sus exportaciones al CAEM eran del orden del 40 por ciento, mientras que para Checoslovaquia, Bulgaria y Albania se cifraban entre el 60-70 por ciento). Estas reformas parciales, en un entorno de debilidad de los gobiernos, desembocaron en 1989 en un deterioro de las finanzas públicas y en un fuerte proceso inflacionario, sobre todo en Polonia donde la inflación fue alimentada por mecanismos de indización salarial y fué exacerbada por un fuerte debilitamiento del balance de pagos.

El primer programa apoyado financieramente por el Fondo fue el diseñado para Polonia por Balcerowicz y su equipo bajo el gobierno dirigido por Solidaridad que asumió el poder en septiembre de 1989. Este programa contiene muchos elementos que se incluyeron en los de los otros países, y fijó la agenda del intenso debate que se produjo sobre la forma más eficiente de encarar el proceso de transformación. A fin de establecer un sistema de precios relativos acordes con los de la economía internacional y así dar una señal clara para la asignación de recursos, a comienzos de 1990 se eliminaron de golpe los controles internos de precios y se liberalizó el comercio exterior y el sistema cambiario. El subsiguiente ajuste del nivel de precios internos sirvió para absorber el exceso de liquidéz en términos reales, reduciendo el riesgo de una espiral inflacionista. La reducción de la inflación desde los altos niveles alcanzados durante 1989 fue el objetivo clave de un fuerte ajuste fiscal y una estricta política monetaria, así como de una dura política de ingresos basada en un impuesto sobre los aumentos de salarios en exceso de una determinada norma y el establecimiento de un tipo de cambio fijo tras una fuerte depreciación. Para dar confianza de que el tipo de cambio fijo podría mantenerse, se negoció un fondo de estabilización de unos mil millones de dólares. El programa polaco de 1990 también contenía ciertas reformas estructurales, sobre todo la privatización de pequeñas y medianas empresas, pero por lo general las reformas de fondo requerían un intenso trabajo de preparación y así fueron necesariamente dejadas para más adelante.

Los programas iniciales en los otros países en 1990-91 fueron en muchos sentidos similares

al de Polonia. Hungría, empero, había avanzado más en la liberalización de precios y en este sentido su programa de 1990 podría considerarse como un paso más de un proceso relativamente gradual; por lo demás, trató de mantener la competitividad externa mediante un tipo de cambio flexible. Checoslovaquia adoptó medidas similares a las de Polonia: liberalizó los precios y el comercio exterior de forma instantánea y fijó el tipo de cambio tras una devaluación que tuvo lugar poco antes del inicio de su programa de 1991, pero no recurrió a un fondo de estabilización. La clave de la credibilidad de su política cambiaria fue una rigurosa política fiscal y monetaria. En su programa de ajuste inicial (1991), Bulgaria siguió el modelo polaco de liberación instantánea de precios y comercio exterior, pero no adoptó un tipo de cambio fijo debido a la persistencia de un fuerte déficit fiscal. Rumania, por su parte, siguió un proceso gradual de liberación de precios, que produjo choques repetidos que impidieron el control de la inflación, lo que a su vez hizo necesario un tipo de cambio flotante. Albania puso en marcha, en 1992, un programa caracterizado por una fuerte reducción del déficit del gobierno, una alta dosis de liberación de precios y del comercio exterior, y un tipo de cambio flotante.

Resultados alcanzados en el campo macro-económico

Los resultados iniciales indican que en Polonia y Checoslovaquia, y en menor grado en Bulgaria y Albania, tras un salto en el momento de la liberación de precios, la inflación cedió rápidamente. El tipo de cambio fijo puede haber ayudado a Polonia y a Checoslovaquia en la formación de expectativas de estabilidad, pero ciertamente el resultado en este campo no fue independiente del grado de solidez de sus políticas financieras. Esto se hizo patente en una fase posterior, en la que Polonia tuvo que abandonar el tipo de cambio fijo debido al debilitamiento de sus políticas financieras. Mediante la reducción del déficit público financiado internamente, Albania progresó en la reducción de la inflación así como en la estabilización del tipo de cambio flotante, un resultado parecido al alcanzado temporalmente por Bulgaria. En Rumania, en cambio, se limitó el salto inicial de los precios, pero debido a los repetidos ajustes posteriores y a la debilidad de sus políticas financieras que presionó sobre el tipo de cambio, la inflación mostró una tendencia al alza.

Cabe observar que el salto en el nivel de precios que tuvo lugar en el momento de la liberalización fue en casi todos los casos más pronunciado de lo que se había supuesto en los programas, lo que denota la gran dificultad de estimar el grado de la anterior represión de precios y de apreciar la amplitud del problema causado por la falta de mercados competitivos y eficientes. Esto pone de relieve la importancia de la secuencia de las reformas, un tema que ha sido debatido intensamente. No cabe duda que el ajuste macroeconómico habría sido más fluido y eficiente si las estructuras comerciales hubieran sido más consonantes con las propias de una economía de mercado en pleno funcionamiento. Esto no arguye, empero, a favor de la conveniencia de haber retrasado la liberación de precios, sino más bien de acelerar las reformas de fondo. En cierto sentido, las presiones provocadas por precios libres son un factor de impulsión de las reformas estructurales.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad económica, los datos disponibles sugieren que de 1989 a 1991 el PIB real de los países de Europa central que iniciaron programas de ajuste en aquellos años cayó entre el 15 y 20 por ciento, mientras que en Albania—país que no introdujo su primer programa hasta 1992—la caída es estimada en alrededor del 35 por ciento. Hay razones muy sólidas para creer que la contracción del producto puede haber sido menor, tanto porque la producción en el período anterior había sido falseada por las estadísticas como porque éstas no recogieron fehacientemente la expansión de la actividad en el naciente sector privado. Con todo, la contracción fue probablemente substancial, y conllevó una reducción del empleo, con la aparición de un problema de paro abierto que no había sido conocido en estos países hasta entonces; la tasa de desempleo es hoy en día entre el 11 y el 19 por ciento en todos los países, excepto en la República Checa donde es del orden del 3 por ciento.

Una cuestión muy debatida es si la caída de la producción podía haber sido evitada; para contestarla, es preciso analizar sus causas, entre las más importantes de las cuales se cuentan la

desaparición repentina del plan como instrumento de gestión empresarial, las dislocaciones producidas por la efervescencia social reinante, el colapso del CAEM, y los cambios de precios relativos (inclusive el mayor precio del petróleo). El papel de las políticas de demanda es menos claro, pero la experiencia de Polonia en la segunda mitad de 1990, cuando hubo un aflojamiento temporal de la política crediticia con resultados más visibles en el comportamiento de los precios que en el nivel de actividad, parece indicar que no existía verdadera capacidad inutilizada. Ciertamente, como ocurrió en no pocos casos, se podía mantener la producción de bienes invendibles mediante crédito, pero es dudoso que esto fuera deseable. La caída de la producción no fue parte de un proceso cíclico sino de un profundo cambio estructural, en última instancia basado en el efecto de los cambios en precios relativos sobre los procesos productivos. Por esto, el éxito de las políticas de ajuste no se puede juzgar por el retorno a unos niveles de producción pasados, que en gran parte eran ilusorios, sino por la vuelta a tasas de crecimiento positivas. Los resultados a este respecto son alentadores.

En Polonia la producción industrial tocó fondo en noviembre de 1991 y desde entonces ha aumentado en más de un tercio, mientras que el PIB real ha tenido tasas positivas de crecimiento por tres años consecutivos. En los otros países el PIB real empezó a crecer durante 1993 ó 1994, excepto en Bulgaria donde un esfuerzo de ajuste inicial no se mantuvo en parte debido a problemas causados por inestabilidad gubernamental y cuya economía parece haber sido afectada con particular dureza por el bloqueo a la antigua Yugoslavia. En la República Checa y en Eslovaquia, el repunte del nivel de producción fue retrasado por la disolución de la Federación, pero los indicadores disponibles apuntan claramente a una tasa de crecimiento positiva en 1994. Quizás la más grata sorpresa la ha dado Albania, donde prácticamente desde el inicio del programa de ajuste ha habido un fuerte repunte no sólo de la producción agrícola, como resultado de la reorganización del sector en manos privadas, sino también industrial.

Algunos problemas en la ejecución de la política financiera

Las finanzas públicas

Un objetivo de los programas iniciales fue la eliminación o reducción drástica del déficit del gobierno (Polonia y Hungría en 1990, Bulgaria en 1991, y Albania en 1992) o el mantenimiento de una sólida posición presupuestaria (Checoslovaquia y Rumania en 1991). De hecho, en un comienzo hubo una tendencia al sobre-cumplimiento de los objetivos en el campo de las finanzas públicas, en gran parte como consecuencia de un aumento inesperado de la recaudación de impuestos sobre los beneficios de las empresas. Estos tuvieron un fuerte aumento inicial debido a la combinación del alza de precios en el momento de su liberalización con un método de valoración de inventarios y depreciación que no permitía ajustes por inflación, así como a las ganancias en moneda local que resultaron de las devaluaciones iniciales.

La experiencia de 1990 dio lugar a un optimismo excesivo sobre el grado de consolidación fiscal alcanzado, y por tanto de las bases para la estabilización macroeconómica, lo que llevó a la formulación a comienzos de 1991 de programas a mediano plazo en Polonia y Hungría. Desgraciadamente, la experiencia de 1990, con sus factores especiales, había oscurecido la tendencia subyacente de las finanzas públicas, la cual fue aflorando en el transcurso de 1991 y llevó al descarrilamiento de estos programas.

La debilidad congénita de las finanzas públicas fué el resultado, en gran medida, de la preponderancia de los impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas, que cayeron más que proporcionalmente con la contracción de la producción industrial. Por supuesto, se hicieron esfuerzos importantes para adecuar la estructura tributaria a las exigencias de la nueva situación. En particular, para fines de 1993, todos los países menos Albania habían introducido impuestos al valor agregado. Inevitablemente, los resultados de estos esfuerzos sólo se dejaron sentir lentamente, sobre todo por la dificultad de crear sistemas de administración tributaria que permitieran

gravar la miríada de nuevos contribuyentes potenciales. En consecuencia, de 1989 a 1994 los ingresos cayeron muy fuertemente en relación con el PIB, excepto en Polonia; en Albania, Bulgaria y Rumania la caída fue de unos 20 puntos porcentuales.

Excepto en Hungría y Polonia, hubo también una fuerte caída del gasto público entre 1989 y 1994, debido sobre todo a la reducción de subsidios; en Albania y Rumania también se cortaron drásticamente los gastos de capital, que en gran parte eran improductivos. En cambio, hubo una tendencia generalizada al aumento de ciertos otros gastos tales como los intereses de la deuda y más aún de las pensiones y otros gastos sociales. Las redes de seguridad heredadas del régimen anterior, en el que los servicios sociales iban ligados al empleo (que incluía un alto grado de paro encubierto), no son apropiadas a la nueva realidad caracterizada por una incidencia creciente de paro abierto y fenómenos de exclusión social. Además, los sistemas de pensiones eran muy onerosos porque de hecho reemplazaban en parte el seguro de desempleo (en Polonia, por ejemplo, en 1990 un tercio de los gastos en pensiones iba a personas que no habían alcanzado la edad jubilatoria), y su costo ha seguido creciendo debido a un fuerte aumento del número de pensionados en relación al de empleados. (En 1993 esta relación alcanzó el 86 por ciento en Bulgaria y entre el 60 y 70 por ciento en Eslovaquia, Hungría, Polonia, y la República Checa). Los países ya han tomado algunas medidas para limitar el costo de las pensiones, pero un enfoque más global será necesario para establecer redes de seguridad adecuadas a la capacidad de estas economías.

La evolución de los ingresos y gastos acabada de describir dio lugar a fuertes déficits presupuestarios que en la mayoría de los países culminaron alrededor de 1992 ó 1993. Desde entonces se han hecho esfuerzos crecientes para contenerlos. Excluyendo Albania, cuyo déficit sigue siendo extremadamente alto aunque su componente de financiamiento interno haya caído fuertemente, el promedio simple de los déficits de los otros países bajó de alrededor del 6 por ciento del PIB en 1992 a un 4 por ciento en 1994. Aún así, el déficit sigue constituyendo un problema serio para el control de la inflación, debido en parte a la poca profundidad de los mercados financieros, y es un obstáculo para el desarrollo de la actividad privada, sobre todo en Bulgaria y Hungría, donde en 1994 el déficit todavía se cifra en alrededor del 7 por ciento del PIB. Sólo la República Checa ha mantenido una línea intachable de disciplina presupuestaria.

La política monetaria y cambiaria

En un sistema rígido de planificación central, la política monetaria no tiene razón de ser, lo que explica que al comienzo del proceso de transformación los países de Europa central carecieran de la infraestructura institucional y técnica necesaria para llevar a cabo la función de control monetario. Un primer paso para corregir el problema fue la creación de bancos centrales desprendidos de funciones de banca comercial (la separación se hizo en Hungría en 1987, en Polonia y Bulgaria en 1989, en Checoslovaquia y Rumania en 1990, y en Albania en 1992), y posteriormente se hicieron esfuerzos para facilitar el desarrollo de los mercados financieros, creando así un marco idóneo para la ejecución de la política monetaria. Aunque este proceso fue inevitablemente lento y queda mucho por hacer, los programas de ajuste alcanzaron el objetivo de evitar procesos de hiperinflación. Excepto en Rumania y recientemente en Bulgaria, también se consiguió impedir que se desarrollara una espiral de ajustes sucesivos de precios, salarios y tipos de cambio. Sin embargo, en términos generales no se consiguió reducir la tasa de inflación a niveles que no pongan en entredicho expectativas de una estabilidad duradera.

Debido a la carencia de mecanismos indirectos de control, inicialmente se mantuvieron controles directos tales como límites de crédito sobre bancos individuales. Estos límites demostraron ser demasiado rígidos, y fueron reemplazados por mecanismos más flexibles a medida que los mercados financieros se fueron desarrollando. Polonia, por ejemplo, introdujo las letras de tesorería como instrumento de financiación del gobierno en mayo de 1991, y surgió un mercado interbancario de dinero que adquirió una importancia creciente a partir de 1992; esto permitió el creciente uso de operaciones de mercado abierto como principal instrumento de regulación de

liquidéz, y los límites de crédito fueron eliminados a principios de 1993. Los límites de crédito también fueron eliminados o hechos más flexibles en otros países; como mínimo, fueron complementados gradualmente por otros instrumentos más flexibles.

Dado que en general las condiciones imperantes dificultaban la liberación de los tipos de interés, se buscó un justo medio entre situarlos demasiado altos—lo que podía militar contra el objetivo inicial de la eliminación del exceso de liquidéz real y a la larga resultar en una apreciación real de la moneda y pérdida de competitividad—o demasiado bajos—lo que podía comprometer el objetivo de controlar la inflación y proteger las reservas internacionales. Por lo general, el objetivo fue fijarlos a niveles que fueran positivos en términos reales, medidos en relación con la inflación proyectada en los programas. Hubo a menudo problemas en la ejecución de estos esquemas, sobre todo en Rumania durante la mayor parte de 1991-93, cuando los tipos de interés fueron a todas luces demasiados bajos.

Una traba a la efectividad de la política monetaria fue la aparición de atrasos de pagos entre empresas, un fenómeno bastante generalizado. En Polonia y Checoslovaquia, el monto de los atrasos fue contenido gracias en parte a tipos de interés positivos en términos reales y a políticas que enfatizaron la disciplina financiera. En Rumania, en cambio, se convirtieron en un problema muy serio, alentados por tres operaciones de limpieza en 1991 mediante crédito del banco central; la acumulación de atrasos tuvo un efecto equivalente a un aumento de la velocidad del dinero, y así alimentó la inflación. Por otra parte, la dudosa calidad del activo de los bancos comerciales contribuyó a la aparición de un fuerte diferencial de tipos de interés entre operaciones activas y pasivas. Este es un problema que en gran parte queda por resolver.

En algunos países surgió un dilema en el manejo de la política monetaria debido a la fuerte afluencia de capitales del exterior. Mientras éstos contribuyeron a una mejora de las reservas internacionales y facilitaron recursos para la inversión y las privatizaciones, también pusieron en peligro el control monetario. En la República Checa, donde la entrada de capitales fue particularmente importante, las autoridades tomaron medidas para impedir su monetización y así evitar efectos indeseables sobre los precios; un argumento a favor de la esterilización fue que la entrada de capital reflejó el uso de crédito externo por parte de las empresas a causa de la falta de facilidades a largo plazo en los bancos del país. Por supuesto, esta política ha tenido costos para las autoridades monetarias, por el diferencial entre el tipo de interés sobre los instrumentos de esterilización y las reservas internacionales, y ha ocasionado una apreciación real de la corona checa. Hay que prestar atención, por lo tanto, para que no se produzca una peligrosa pérdida de competitividad externa. En Polonia se produjo un fenómeno de apreciación real en 1991, que llevó a la sustitución del sistema de tipo de cambio fijo que se había establecido al principio de 1990 por un sistema de ajustes preanunciados, con el objetivo de proteger la competitividad externa. En Hungría, la apreciación real que se ha acentuado año tras año ha contribuido a un fuerte déficit en cuenta corriente que no parece sostenible.

¿Donde está hoy en día el proceso de transformación?

Indudablemente, han habido fuertes avances en el componente macroeconómico del proceso de ajuste. Merece destacar, sobre todo, la vuelta en casi todos los países a tasas de crecimiento positivas, las cuales han sido acompañadas en algunos casos de un cambio de tendencia, aunque tenue de momento, en la tasa de paro. Para esto, fue esencial controlar los procesos inflacionarios. La inflación típicamente cayó a niveles relativamente bajos tras el alza en el nivel general de precios que siguió a la liberalización inicial, pero ha resurgido en parte debido a un deterioro generalizado de las finanzas públicas. También vale la pena mencionar la mejora ocurrida en las cuentas externas, reflejada en fuertes aumentos de las reservas internacionales y en cuentas corrientes que por lo general parecen viables, así como la reducción del peso de la deuda externa en aquellos casos (Polonia, Bulgaria, y Albania) en que el problema había sido más perentorio.

Con toda seguridad, la consolidación de la estabilidad macroeconómica va a requerir un progreso mayor en las reformas estructurales, aunque también en este campo se han hecho avances, sobre todo en lo que se refiere a las privatizaciones (en Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Albania, no menos de la mitad del PIB lo contribuye hoy el sector privado) pero también, aunque en diferente grado, en la reforma de los sistemas financieros, la restructuración de las empresas, y la creación de los instrumentos de control presupuestario y monetario.

Mirando hacia adelante, es fundamental continuar con la política anti-inflacionaria mediante una estricta disciplina presupuestaria y monetaria. Para ello, las autoridades deben dotarse más plenamente de los instrumentos de control, lo que requiere a su vez un mayor desarrollo y una regulación más efectiva de los sistemas bancarios y de los mercados financieros. La creación de economías dinámicas también requiere la extensión de los programas de privatización a las grandes empresas, un campo en que excepto en la República Checa ha habido rezagos. Reformas de los sistemas de pensiones y de los otros componentes de las redes de seguridad así como de la legislación sobre la competencia también serán necesarias para fomentar el ahorro y asegurar la eficiencia de la inversión.

Los países de Europa central han demostrado estar comprometidos con los objetivos de consolidar la estabilidad macroeconómica y establecer economías de mercado viables, habiendo corregido el curso de sus políticas siempre que fue necesario para enfrentarse con desviaciones que se hayan producido. Continuando por este camino, hay que esperar que podrán llevar a buen término el proceso de transformación económica en que están empeñados.